

LOS QUE CREEN QUE ES TARDE

Entre los que creen que las asociaciones y su actual Estatuto llegan demasiado tarde está el señor Jordi Pujol (véase pág. 17), que cree que las asociaciones son «demasiado delgadas», y otra voz de Cataluña, la de Eduardo Tarragona: «Se han terminado los Areil-

za, los Tarragona y los Fraga —dice apresurándose a enterrar lo que aún no ha nacido—. A lo que se va es a los partidos políticos a través de las asociaciones». Pero hace gestiones con sus amigos políticos, quizá para formar una asociación que pueda convertirse finalmente en partido político con vocación de partido político. ■

SEAT

Las tres crisis

El señor Alcaina está algo enfadado. Lo prueba su carta de respuesta a monseñor Galbany, delegado diocesano de Pastoral Obrera del Obispado barcelonés. Conviene aclarar que el señor Alcaina es el presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Sindicato del Metal, y como tal, la máxima cabeza burocrática del sector industrial que protagoniza el caliente invierno laboral de Barcelona. Monseñor Galbany le había pedido un lugar de reunión para que los obreros expedientados o despedidos de Seat pudieran discutir su situación sin tener que recurrir al encuentro clandestino. El señor Alcaina le ha retirado a Galbany el tratamiento de monseñor y encabeza la carta de respuesta con el de «señor». Alcaina asegura que ya se había concedido ese lugar de reunión y que, por lo tanto, «... resulta innecesaria cualquier recomendación oficiosa o intervención ajena a la clase obrera. Y resulta evidentemente paradójico que se pretenda suplir, por parte de la Iglesia, lo que, como en tantas otras materias, no es ni de su ámbito ni de su competencia».

El enfado de tal alto cargo de la CNS es justificable. Barcelona, Ciudad de Ferias y Congresos, se ha convertido en un horno político social, en el que no se sabe exactamente lo que se cuece. Si se observa el redactado de la respuesta del señor Alcaina, el lector se llevará la sorpresa de descubrir que los mandos de la CNS aceptan la existencia de una «clase obrera» delimitable, definitivamente arrinconado el término «productores» que durante años fue la perla lingüística de la nunca aplazada revolución verbal de los hombres y las tierras de España. El conflicto de la Seat ha creado un cierto nerviosismo ambiental cotidianamente incrementado por nuevos sucesos. Las manifestaciones callejeras se han sucedido, y el pasado sábado fueron detenidos doce manifestantes más. Las autoridades insisten en que se trata de un problema político artificial, manejado por agitadores profesionales, y extienden esta explicación al rosario de conflictos sociales que

recorre el País Vasconavarro, Cataluña y Madrid. En todos estos conflictos se perciben planteamientos comunes derivados del malestar popular por el coste real de la vida, insisto en el calificativo «real», no compensado por aumentos de sueldos «estadísticos». Pero cada conflicto tiene su capítulo de peculiaridades. Y especialmente el de Seat, en el que se mezclan los más complejos niveles conflictivos.

UNA, DOS, TRES CRISIS

La relativa paralización del ritmo de producción de la industria del automóvil suele justificarse por la «crisis económica» global que afecta al mundo capitalista como consecuencia de la inflación y la crisis energética. Al romperse la sincronización entre oferta y demanda, los productos no tienen salida al mercado, se tienen que almacenar, y las empresas tienen que amorrar el ritmo de producción por distintos procedimientos: Disminuyen o las horas de trabajo o despidiendo mano de obra. Este planteamiento afecta al conjunto de la industria del automóvil, y en el caso Seat se complica por la especial relación de dependencia que existe entre la empresa y la Fiat. Durante los años de gran expansión de la industria del automóvil, la Fiat tuvo especial interés en que Seat llegara a altos índices de producción de cara a los mercados extranjeros, porque el trabajo de los obreros españoles era más barato que el de los obreros italianos, y el nivel reivindicativo menor, debido a las limitaciones políticas que en España tienen los conflictos obreros. Pero en el momento en que la crisis empezó a afectar seriamente a la Fiat, empezó a plantear cortapisas al exceso de producción española mediante una doble presión económica y tecnológica que se planteó más agudamente precisamente en el momento en que la crisis comenzaba a afectar al mercado español del automóvil. La reducción de la demanda en proporción al crecimiento de la oferta era general, pero además la Seat se veía afectada por la competencia creciente de las otras marcas nacionales

que progresivamente discutían algunos privilegios autárquicos conservados por la empresa mirada de la industria automovilística nacional.

En este marco se produjeron los conflictos obreros de noviembre pasado. La empresa planteó una reducción de trabajo que, directa o indirectamente, afectaba a un conjunto de más de ciento cincuenta mil trabajadores repartidos por toda España. Unos setenta y cinco mil habitaban en la provincia de Barcelona, directamente empleados en las factorías Seat o bien, indirectamente, en empresas auxiliares que dependen del ritmo de producción de la empresa central. Los trabajadores de Seat reclamaban una semana laboral de cuarenta horas, setecientas pesetas diarias de salario mínimo, con una revisión trimestral a tenor de las alzas reales del coste de vida. Otras reivindicaciones obreras recogían una crítica de la representatividad de algunos mandos sindicales de la empresa y una demanda de aplicación de amnistía a los sancionados o inculpados por pasados conflictos. La reacción de la empresa fue, en definitiva, de extrema dureza: Trece mil obreros fueron suspendidos de empleo y sueldo durante diez días. La palabra lock out, es decir, «huelga de empresa», circuló entre los enterados, y esta impresión se robusteció por el hecho de que la empresa también endurecía sus posturas en la negociación del convenio en curso.

Fue entonces cuando los obreros de la Seat se echaron a la calle. Primero trataron de concentrarse en torno al edificio de la Organización Sindical, situado en Via Layetana; por cierto, muy próximo tanto del Obispado como de la Jefatura Superior de Policía. Se celebraron asambleas obreras en plena calle y puede hablarse de una cierta prudencia de las autoridades en su tratamiento de la situación. La actitud de la empresa era tan obviamente discutible, que ante la opinión pública quedaba bastante clara la responsabilidad principal del desorden. Por otra parte, la vanguardia obrera de la Seat tomaba distintas iniciativas de cara a divulgar su problema a otras empresas y a mantener una información constante con sus propios compañeros de trabajo. Se gestaba un protagonismo crítico y reivindicativo que a la larga acabaría convirtiéndose en uno de los factores más interesantes y graves del conflicto.

La Delegación Provincial del Trabajo forcejeó con la empresa para que redujera sus intransigencias y se taponara un conflicto que amenazaba con extenderse a todo el cinturón industrial barcelonés. Los obreros, asesorados por abogados laboristas, lanzaron una plataforma reivindicativa muy elaborada, en la que no se ceñían a las reivindicaciones habituales, sino que llegaban a análisis más profundos

en la relación con la empresa y en las medidas para superar la crisis derivada de la rotura del ritmo de producción de automóviles. Teniendo en cuenta los beneficios alcanzados por la empresa, razonaban que no se reflejaban en las concesiones hechas a los trabajadores. En cuanto a la crisis del sector, planteaban la necesidad de reconvertir la empresa y orientarla hacia la fabricación de otros productos; por ejemplo, medios de transporte público.

El conflicto se arrastró con mayor o menor sordina a lo largo de noviembre y diciembre. La sensibilización de la zona industrial del Bajo Llobregat llegó a uno de los niveles más altos detectados desde el fin de la guerra civil. La crisis del automóvil estaba a un nivel; la crisis de la relación Seat-Fiat, a otro, y, finalmente, afloraba una crisis evidentemente política que reivindicaba otros cauces de representatividad obrera y una actitud decididamente protagonista en la resolución de las crisis anteriores, tal como la habían exigido los obreros de la Fiat.

CARRERAS, FLORES Y TIROS

Paros, trabajo lento, sanciones, despidos de cuatrocientos obreros significan el detonador para un nuevo estallido. Los obreros celebran asambleas en la propia empresa y se manifiestan en plena calle, sobre todo en las Ramblas. La reacción de la Fuerza Pública es contundente. El gobernador civil advierte que va a actuar sin contenciones contra todos los que activan el conflicto y contra los que adoptan una actitud excesivamente pasiva; por ejemplo, la propia empresa, que tolera asambleas en su seno. Las asambleas obreras se han convertido en auténticos ágoras de comunicación de política social que ratifican las demandas planteadas: Sobreseimiento de las sanciones, anulación del laudo dictado, reanudación de las negociaciones con la empresa sobre la base de discusión de la plataforma reivindicativa, la dimisión del Jurado de Empresa. Uno de los aspectos más nuevos de la situación es la labor de difusión realizada por delegaciones de obreros que han clarificado sus reivindicaciones ante instituciones y corporaciones del más variado signo: desde el Arzobispado a la Capitanía General, para citar dos extremos claramente significativos.

Los especialistas que tratan de huir de un análisis político de la situación, acaban en un callejón sin salida oscuramente político. En el fondo de la cuestión está la crisis de la empresa, que o es sostenida artificialmente por la Administración, o acaba definitivamente integrada en la estrategia global de la Fiat, o se hunde. Ninguna de estas tres soluciones va a contentar ni a los asociados ni a los trabajadores, aunque

cualquier valoración objetiva comprende que los más graves dramáticamente afectados serán esos ciento cincuenta mil obreros españoles que dependen de una industria excesivamente hinchada, alegremente programada y poco acostumbrada a asimilar los niveles de contestación asumidos por los trabajadores.

Por las calles de la ciudad, carreras, golpes, algún disparo, detenciones. La Rambla de las Flores ha asistido a la crispación de los gritos y los despliegues relámpago de la Fuerza Pública ante el sobresalto de la variopinta humanidad habitual de una de las calles más populares del mundo. Por si faltara algún factor de complicación, es obvio que

esta crisis laboral incide en un momento especialmente delicado de la "cosa política" en general, y son muchos los que empiezan a darse cuenta de que es más importante solucionar el caso de la Seat que propiciar la alianza Silva-Areitza-Fraga, por citar la superproducción política en ténico con más presupuesto.

Se insiste demasiado en explicar la envergadura y empecinamiento de los hechos por la actuación de agitadores profesionales. Lo lógico es que de un país progresivamente industrializado y contradictoriamente regulado por superestructuras agropecuarias, empiece a tener más descuidos que remiendos. ■ M. VAZQUEZ MONTALBAN.

CATALUÑA

Jordi Pujol o la hora de la clarificación

A comienzos de la década de los sesenta, el nombre de Jordi Pujol estaba escrito en paredes, puentes, túneles, muros de Cataluña. Detenido con motivo de un acto de afirmación catalanista en el Palacio de la Música de Barcelona y en presencia de varios ministros de los de entonces, Pujol fue condenado a ocho años de cárcel, de los que cumplió cuatro, primero en la Cárcel Modelo de Barcelona y después en la de Zaragoza. Médico que no ejerce, Pujol siempre ha simultaneado sus facetas de presidiario, político y banquero. Durante años, manos anónimas escribieron su nom-

bre en las paredes de Cataluña y luego también durante años menos anónimas han escrito su nombre en las agendas de gentes importantes. Pujol tiene hoy un doble crédito: popular y patrial. El primero se lo ganó en el Palacio de la Música en 1960. El segundo se lo ha venido ganando desde su despacho de la Banca Catalana. No creo que haya hoy día en Cataluña un líder potencial mejor situado para atraerse la clientela social de la burguesía democrática, y al mismo tiempo recibir el «consensus» de algunos sectores oligárquicos catalanes y de una pequeña burguesía democrática más radical. Que Pujol es consciente de su propia situación lo demuestra el que en el salón de actos de ESADE (Escuela Superior de Administración de Empresas) haya lanzado una proclama clara, contundente, sin duda el discurso político más claro que se ha pronunciado en la Península Ibérica desde que se levantó la veda de los discursos trascendentales no necesariamente ligados a la inauguración de un pantano o la entronización de Santiago Apóstol.

Las tesis de Pujol son fácilmente resumibles. Cataluña ha superado uno de los períodos más críticos de su existencia como país. Durante los años cuarenta vivió postrada con la falsa conciencia de padecer un «paréntesis» histórico. A partir de los años cincuenta se desencadena un proceso de recuperación, preferentemente cultural y tímidamente político. Según Pujol, Cataluña era entonces una realidad «... económicamente disminuida, políticamente aniquilada, culturalmente reducida al "ghetto"; es decir, era un pueblo desmoralizado, decapi-

tado, vencido». Se pone en marcha la etapa de «fer país» (hacer país), basada en la reivindicación lingüística y despegue económico. Estas condiciones se han superado, y ha llegado la hora de la verdad política, en la cual Cataluña debe tener voz propia, en relación con el amplio espectro de sus fuerzas sociales. Sobre todo, Pujol convocó a la burguesía catalana para que no abdicara en este momento de su responsabilidad política. Dirigió una especial llamada a la burguesía que ha hecho manitas con la «tecnocracia», requiriéndola para un compromiso con el país y con el futuro.

La traducción de esa Cataluña políticamente vivificada sería un centro —izquierda que comprendería a fuerzas políticas homologadas en toda Europa: democracia cristiana, social demócratas,

res económicos, junto a políticos y minipolíticos representantes de variadísimas tendencias. De hecho, el sentido general de la alocución de Pujol responde a un escepticismo catalán sobre el cauce político abierto por la Ley de Asociaciones. El señor Cruylles de Peratallada, hombre con vocación de futuro, en su negativa ante el Consejo Nacional no hizo otra cosa que reflejar un estado muy generalizado de conciencia catalana ante la cuestión. Pujol ampliaría puntos de su charla en el transcurso de una cena posterior. Pujol insistió en que considera catalán a «... tot home que viu i treballa a Catalunya (todo hombre que vive y trabaja en Cataluña)». También respondió muy claramente al tema de la juventud, negando que un programa de centro-izquierda fuera poco atractivo para la ju-



Aspecto del salón de actos de ESADE, durante la conferencia de Jordi Pujol.



Pujol: Un doble crédito, popular y patrial.

socialistas...: «... es decir, todos aquellos que aspiran, para entendernos, a una sociedad similar a la sueca». Para conseguirlo no queda otra opción que la militancia política, buscando ese amplio «consensus» democrático catalán, situable más allá tanto de una dictadura autoritaria, como de una organización social de corte soviético.

Sobre las asociaciones políticas dijo que no piensa entrar en su juego: «... la Ley de Asociaciones tiene un lenguaje muy diferente del que Catalunya sabe y quiere hablar». Dijo que Cataluña precisa fuerzas políticas propias que le permitan un poder negociador para participar y pactar a nivel de Estado español. Cataluña ha de tener su propia política, y ésta ha de ser eminentemente social: Mayor fiscalidad, mayor control público sobre la economía, menos especulación y sindicatos fuertes.

Los aplausos fueron de final de Norma en el Liceo, interpretada la ópera de Bellini por Montserrat Caballé. Y aplaudían representantes de poderosísimos secto-

ventud catalana: «La mejor política de cara a los jóvenes es la credibilidad, es la consecuencia con lo que se dice, se piensa, se siente». Una frase de Pujol no tiene desperdicio: «Hay gente que les molesta que les llamen social-demócratas, y esto me parece fatal, sobre todo si lo son». «Al referirme a Cataluña no pienso en "unidad", que me parece algo forzado, sino en "consensus" que presupone negociación. Considero que España es un Estado plurinacional, y el caso de Cataluña no se reduce a un problema administrativo».

Se ha empezado a hablar claro. Por la boca de Pujol ha hablado buena parte de la burguesía del país, burguesía a distintos niveles. Tal vez no tanta como Pujol cree, pero mucha, muchísima más de la que pueden haber censado las no reveladas estadísticas oficiales. Si Pujol dio ayer el paso que dio, quiere decir que tiene al menos una espalda cubierta. La otra, hoy por hoy, aquí por aquí, no la tiene nadie. ■ M. VAZQUEZ MONTALBAN. Fotos: SOTERAS.